

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Rad: 11001-31-100-29-2019-00126-00

**Clase de proceso: Acción de Tutela
(Incidente de Desacato)**

Se pronuncia el Despacho con relación al Incidente de desacato presentado por el señor **ORLANDO RIVERA VARGAS – REPRESENTANTE LEGAL GRUPO ACISA S.A.S.** en contra de la **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**

ANTECEDENTES

El señor **ORLANDO RIVERA VARGAS – REPRESENTANTE LEGAL GRUPO ACISA S.A.S.**, inicia acción de tutela contra de la **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, la cual fue de conocimiento de este Despacho y en la que buscó se le tutelara su derecho fundamental de petición, el que fue denegado en primera instancia por este Juzgado, mediante sentencia calendada 28 de febrero de 2019, decisión que fue objeto de impugnación, y decida por el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante proveído de fecha 29 de abril de 2019, en el cual se revoca parcialmente, la sentencia impugnada, esto es, 28 de febrero de 2019, tutelando el derecho de petición invocado por el señor ORLANDO RIVERA VARGAS frente al señor representante legal de la Fiduciaria La Previsora S.A., ordenándole que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del fallo, procediera a dar contestación a los numerales 2,12,30,31,39 y 40 de la petición que le fue formulada por el señor ORLANDO RIVERA VARGAS el 26 de octubre de 2018 y a remitirla al lugar indicado por el mismo; confirmando en lo demás la sentencia objeto de impugnación.

El señor **ORLANDO RIVERA VARGAS** solicitó dar inicio al incidente de desacato en contra de la accionada por cuanto no ha dado cumplimiento a la orden emanada dentro de la acción de tutela.

TRAMITE PROCESAL

Mediante providencia del 14 de mayo de 2020, se ordenó previo a dar trámite al presente incidente de desacato, requerir a la parte incidentada mediante autos calendados 14 de mayo de 2020 (archivo No. 12) y 26 de mayo de 2020 (archivo No. 11), 14 de julio de 2020 (archivo No. 15), 30 de junio de 2020 (archivo No. 17), siendo allegada respuesta por parte del Dr. Diego Alberto Mateus Cubillos, junto con las demás respuestas requeridas por parte de la entidad accionada y obrantes en el expediente digital, cuyas respuestas fueron puestas en conocimiento del accionante, conforme militan (archivo No. 18 al 42), y ante la solicitud de sanción por incumplimiento a lo dispuesto en el fallo de tutela, incoada por el incidentante, se ordenó por auto calendado 5 de marzo de 2021 abrir trámite incidental (archivo No. 44) y mediante auto calendado 24 de marzo de 2021, se ordenó abrir a pruebas (archivo No. 47), estándose a la documental obrante en el plenario.

Atendiendo al memorial allegado por la parte incidentante, se dispuso mediante proveído calendado 28 de mayo de 2021, (archivo No. 52) notificar de manera personal al responsable del cumplimiento de los fallos de tutela Dr. Diego Alberto Mateus Cubillos – Director de Procesos Judiciales y Administrativos de la Fiduprevisora, el auto mediante el cual se ordenó abrir trámite incidental, a fin de evitar posibles nulidades. Al igual que se dispuso mediante auto calendado 17 de agosto de 2021, (archivo No. 57), vincular a los doctores ANGELA TOBAR GONZÁLEZ en su

calidad de Directora de Prestaciones Económicas y al Dr. JAIME ABRIL MORALES – Vicepresidente Fondo de Prestaciones de Fiduprevisora, al haberse indicado ser las personas responsables de dar cumplimiento a providencias judiciales derivados de procesos de tutela, ordenándoles notificar el auto de apertura del trámite incidental.

Una vez surtidas las notificaciones correspondientes, fue allegada respuesta por parte del Dr. Diego Alberto Mateus Cubillos – Director de Procesos Judiciales y Administrativos de la Fiduprevisora, obrante a (folios 68 y 69 del expediente digital), quién manifestó que la Fiduprevisora S.A., dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de segunda instancia, calendada 29 de abril de 2019, procediendo a dar respuesta de fondo a la petición elevada por la parte accionante el 26 de octubre de 2018, con radicado No. 20210822655351 de fecha 27 de septiembre de 2021, a la dirección de correo electrónico Orlando.rivera.vargas@gmail.com y grupoacisaconsultores@gmail.com (registrados como correos de notificación), de cuya respuesta dirigida al señor ORLANDO RIVERA, fue aportada copia, quién refiere encontrarse satisfecha a cabalidad la solicitud realizada, por lo que se configura una carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO, solicitando el cierre del presente trámite incidental. Cuya respuesta fue puesta en conocimiento de la parte incidentante mediante auto adiado 13 de octubre de 2021 (folio 71), para que se pronunciara al respecto, el que fue notificado a través de la secretaria del Despacho (folio 72).

Revisada la contestación dada por la entidad incidentada, al aquí incidentante señor ORLANDO RIVERA VARGAS – Representante Legal Grupo ACISA S.A.S., refiere que la solicitud radicada con el No. 20180323179162 el 26 de octubre del año 2018, emitió pronunciamiento frente a cada una de las peticiones objeto del fallo constitucional, contenidas en los numerales 2,12,30,31, 39 y 40, conforme se dispuso en el numeral tercero de la parte resolutive del fallo proferido en segunda instancia calendado 29 de abril de 2019, cuya respuesta fue enviada vía correo electrónico a los correos suministrados por la parte incidentante. Aunado a lo anterior, y con el fin de surtirse la notificación en debida forma, se ordenó por parte de este Juzgado, mediante auto calendado 28 de enero del año en curso, notificar la respuesta allegada a la parte incidentante, al segundo correo por ella suministrado como grupoacisaconsultores@gmail.com, para que se pronunciará al respecto, en el término de tres (3) días, (archivo No. 73 y 74 del expediente digital), el cual se recorrió en silencio.

CONSIDERACIONES

Señala el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, que *"La persona que incumple una orden de un Juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar"* Acotando en su aparte final *"La sanción será impuesta por el mismo Juez, mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción"*. El desacato es, por tanto, un incumplimiento que genera la imposición de una sanción agotando el cumplimiento del debido proceso.

La figura jurídica del desacato contemplada en la norma antes reseñada, fue erigida como un instrumento del cual dispone el Juez de conocimiento de la tutela, para sancionar a quien hace caso omiso de las órdenes impartidas con el propósito de hacer efectivos los derechos fundamentales de la persona que ha reclamado su protección constitucional, pues tal protección resultaría inócua si no existieran instrumentos como éste, que aseguran el cumplimiento de las órdenes dispuestas para obtener la cesación de la conducta de la cual deviene la vulneración o amenaza del derecho fundamental amparado.

Por lo mismo, para el establecimiento del desacato de la tutela concedida se necesita que se estructuren los siguientes requisitos: 1. Que haya una resolución judicial de tutela que además de haberse concedido, señale en forma clara no solamente el derecho protegido o tutelado, sino también la orden y la definición

precisa de la conducta a cumplir con el fin de hacer efectivo el amparo, con la indicación del plazo o duración en que debe cumplirse (Artículos 25 y 29 del Decreto 2591 de 1991); 2. Que la orden judicial de tutela sea obligatoria para quien la recibe, teniendo en cuenta que sólo el responsable del agravio deberá cumplirla sin demora, desde que se le pone en conocimiento (Artículos 27, inciso 1, 30 y 27 ídem); y 3. Que la persona ordenada haya incumplido la orden judicial de tutela, que por lo general se establece por la preclusión del plazo señalado en el fallo sin haberse adoptado la medida de protección ordenada.

Se precisa entonces la necesidad que asume el obligado a cumplir una orden de tutela, de poner a su disposición todas sus facultades, capacidades y recursos a fin de darle ejecución a lo ordenado, debido a la naturaleza protectora de la acción de tutela, porque, sabiéndose, como lo indica el fallo que da la orden, que existe un derecho constitucional fundamental lesionado o amenazado, es deber inmediato de todos, particularmente del obligado específicamente a ello, proceder a darle la protección adecuada sin dilación alguna. Y ello ocurre con mayor razón cuando los obligados son funcionarios públicos.

Así, la teleología del artículo 52 del Decreto 2591 es obtener a ultranza la efectividad de la tutela que ha sido concedida, creando para el accionante un mecanismo expedito que conduzca a plenitud al goce y disfrute del derecho fundamental que le ha sido vulnerado, siendo ésta la genuina finalidad del incidente de desacato, criterio orientador que, por lo mismo, no puede perderse de vista a la hora de interpretar las normas que regulan la materia, de donde se deduce que las sanciones allí previstas para quien desobedece la orden del juez constitucional, no constituye el fin mismo del incidente de desacato, sino apenas el medio a través del cual se obtiene aquello. No se concibe, por tanto, un incidente de desacato que persiga apenas un objetivo sancionatorio.

Descendiendo al caso bajo estudio, advierte esta Juzgadora, que después de diferentes requerimientos realizados por el Despacho a la entidad **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, y conforme las respuestas que fueron allegadas, las que fueron siempre puestas en conocimiento del incidentante, sin que se hubiese dado cabal cumplimiento al fallo constitucional de segunda instancia, calendado 29 de abril de 2019, y previa solicitud de la parte incidentante, se dispuso la apertura del presente trámite incidental mediante auto calendado 5 de marzo de 2021, donde después de surtidas las notificaciones, al responsable del cumplimiento de los fallos de tutela, se obtuvo la respuesta por parte del Dr. Diego Alberto Mateus Cubillos – Director de Procesos Judiciales y Administrativos de la Fiduprevisora, obrante a (folio 68 y 69 del expediente digital), emitiendo pronunciamiento frente a cada una de las peticiones objeto del fallo constitucional contenidas en los numerales 2,12,30,31, 39 y 40, conforme se dispuso en el numeral tercero de la parte resolutive del fallo proferido en segunda instancia calendado 29 de abril de 2019, cuya respuesta fue enviada vía correo electrónico a los correos suministrados por la parte incidentante, sin que hubiese realizado reparo alguno luego de transcurrido el término concedido.

En vista de lo anterior, es por lo que se configura un hecho superado que torna improcedente el incidente de desacato al fallo de tutela, tema sobre el que la Corte Constitucional ha enseñado:

“Esta corporación en reiterada jurisprudencia ha manifestado en relación con el hecho superado, que éste se origina con ocasión de la cesación de la acción u omisión impugnada de una autoridad pública o un particular, lo que consecuentemente torna improcedente la acción iniciada, pues no existe un objeto jurídico sobre el cual proveer”. (Sentencia T-173/93).

(...) si la situación de hecho que genera la violación o la amenaza ya ha sido superada, el instrumento constitucional de defensa pierde su razón de ser. Es decir, la orden que pudiera impartir el juez, ningún efecto podría tener en cuanto a la efectividad de los derechos presuntamente conculcados, el proceso carecería de objeto y la tutela resultaría entonces improcedente”. (Sentencia T – 988/02)

Así las cosas, tenemos que la entidad incidentada **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, dio cumplimiento con el derecho tutelado al accionante, al haberse logrado obtener la respuesta a cada uno de los ítems objeto de amparo constitucional a través del derecho de petición tutelado, conllevando con ello una carencia total de objeto, por hecho superado, y por ende sin que haya lugar a imponer sanción por desacato, ordenándose en consecuencia, el archivo de las presentes diligencias.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.**,

RESUELVE:

PRIMERO: ABSTENERSE de IMPONER SANCIÓN por hecho superado, contra los responsables del cumplimiento a fallos de tutela de la entidad incidentada **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, por los motivos expuestos en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a las partes e intervinientes el contenido del presente proveído, dejando las constancias de rigor, en los términos de que trata el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 5 del Decreto 306 de 1992.

TERCERO: Cumplido lo anterior, ORDENAR el archivo de las presentes diligencias.

NOTIFÍQUESE,

SANDRA MEJÍA MEJÍA
JUEZ

JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE
BOGOTÁ D.C.

El anterior auto se notificó por estado No. 38

Hoy 1º de abril de 2022

CAROLINA SANTAMARIA LUNA
Secretaria

Firmado Por:

Sandra Mejia Mejia

**Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Familia 29 Oral
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5e69898204328185381a6570e58f10bae3122532f61e5515c5f9111eb4672ed3**
Documento generado en 31/03/2022 07:43:50 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>